

### ANEXO 3 –FORMATO TRASLADO DE HALLAZGOS

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA			
FORMATO DE TRASLADO DE HALLAZGO FISCAL			
<b>1. DEPENDENCIA QUE DETECTÓ EL HALLAZGO FISCAL</b>			
1.1. Contraloría Delegada.	SECTOR EDUCACION		
1.2. Gerencia Departamental Colegiada.	CAUCA		
1.3. Otro.	Indique cuál:		
<b>1.1 ORIGEN DEL HALLAZGO.</b>			
PVCF	DENUNCIA	OTRO. INDIQUE CUAL	
X			
<b>1.2 PERIODO FISCAL EVALUADO.</b>			
Desde		Hasta	
2019		2019	
<b>1.3 ACTUACIÓN QUE ORIGINA EL HALLAZGO</b>			
Auditoría	Control Excepcional	ACES	OTRO. INDIQUE CUÁL:
X			
<b>1.4 FECHA DE REPORTE DEL HALLAZGO:</b>			
AA	MM	DD	
08	06	2020	
<b>1.5 NÚMERO DE IDENTIFICACION DEL HALLAZGO*:</b>			
82470			
<i>*Este número es generado por el SICA.</i>			
<b>1.6 FUNCIONARIOS QUE CONFIGURARON EL HALLAZGO:</b>			
NOMBRE	ROL	DEPENDENCIA	
JACKELINE MUÑOZ LOPEZ	LIDER	VIGILANCIA FISCAL	

JUAN JOSE CERON	AUDITOR	VIGILANCIA FISCAL
-----------------	---------	-------------------

**2. DATOS GENERALES DEL AUDITADO.**

<b>Nombre o Razón Social:</b>	UNIVERSIDAD DEL CAUCA
<b>NIT:</b>	891500319-2
<b>Código DANE:</b>	
<b>Domicilio:</b>	Calle 5 N° 4-70

**2.1 NATURALEZA JURÍDICA DEL AUDITADO\***

SEM	EICE	EP	ESPD	OTRO. INDIQUE CUÁL:
		X		

*\*SEM: Sociedad de Economía Mixta*  
*EICE: Empresa Industrial y Comercial del Estado*  
*EP: Establecimiento Público*  
*ESPD: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios*

**2.2. FUENTE DE LOS RECURSOS AUDITADOS**

NOMBRE DEL PROYECTO -/ PROGRAMA	CODIGO PRESUPUESTAL	FUENTE DEL RECURSO*	VALOR
Gastos de funcionamiento/Impuestos, tasas y multas	F.002.000.03.0.F 00200003001014	Del presupuesto asignado/orden nacional	1,035,550,232.00

*\* Precisar si se trata de recurso de regalías, SGP, ordinarios del presupuesto nacional, departamental o municipal, transferencias, crédito interno o externo, vigencias futuras entre otros.*  
*Diligencie tantas filas como fuentes de recursos estén comprometidos*

**2.3 NIVEL DEL AUDITADO\***

NIVEL CENTRAL	NIVEL DESCENTRALIZADO	NIVEL TERRITORIAL	OTRO. INDIQUE CUÁL:
			ENTE UNIVERSITARIO NACIONAL

*\*Corresponden al nivel descentralizado las entidades que administran recursos públicos del orden nacional, pero tienen su sede en las regiones. Corresponden al nivel territorial los departamentos, distritos, municipios, territorios indígenas, áreas metropolitanas.*

**2.4 DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL AUDITADO.**

<b>Nombre:</b>	JOSE LUIS DIAGO FRANCO
<b>Cargo:</b>	RECTOR
<b>Cédula:</b>	10535839
<b>Dirección:</b>	Calle 5 N° 4-70
<b>Teléfonos</b>	(2) 8209900 EXT 110
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:rectoria@unicauca.edu.co">rectoria@unicauca.edu.co</a> , <a href="mailto:jldiago@unicauca.edu.co">jldiago@unicauca.edu.co</a>

**3. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS PRESUNTAMENTE IRREGULARES DEL HALLAZGO FISCAL\*.**

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS
<p><i>Artículo 6o. Ley 610 de 2000. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.</i></p> <p><i>Artículo 8o. Ley 42 de 1993. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas. Así mismo, que permita identificar los receptores de la acción económica y analizar la distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales y entre entidades territoriales y cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los mismos.</i></p> <p><i>Artículo 34 Ley 734 de 200 Son deberes de todo servidor público: Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.</i></p>

La Territorial Cauca del Ministerio de Trabajo por medio de la Resolución No. 118 del 7 de mayo de 2018 decidió imponer sanción pecuniaria a la Universidad del Cauca por \$31.249.680, quedando definitivamente en firme en Resolución No. 087 del 28 de febrero de 2019, una vez se decidió la impugnación presentada por el *alma mater*, al considerar que se cometió vulneración al artículo 416-A. del Código Sustantivo del Trabajo - C.S.T. relacionado con el derecho de permiso sindical.

Para dar cumplimiento a la medida administrativa, el ente universitario expidió la Resolución 267 del 8 de abril de 2019, por la cual se ordenó a la División de Gestión Financiera la realización del registro de disponibilidad presupuestal y generar el pago de \$31.249.680, el cual fue llevado a cabo el día 9 de abril de 2019, tal como se soporta en comprobante de egreso 201900016.

La sanción fue generada a causa de los hechos producidos por la administración de la Universidad del Cauca y que el Ministerio del Trabajo consideró eran constitutivos de vulneración al derecho de permiso sindical regulado en el C.S.T., situación que trajo como consecuencia para la *alma mater*, el menoscabo de su patrimonio, y por tanto, un detrimento patrimonial para el Estado colombiano en cuantía de \$31.249.680.

*\*Para desarrollar este ítem explique los elementos del hallazgo: Condición, criterio, fuente de criterio, causa y efecto. Si requiere mayor espacio adjunte hoja (s) indicando el número de identificación del hallazgo y la auditoría que corresponda.*

*Para la descripción de los hechos, el auditor deberá determinar las actividades de la gestión fiscal en virtud de las cuales se generó el detrimento patrimonial de conformidad con el art. 3 de la Ley 610 de 2000*

#### 4. ANÁLISIS DEL DAÑO\*.

##### Análisis del daño.

En el presente caso nos encontramos ante la imposición ante la imposición de una multa por parte del Ministerio del Trabajo contra la Universidad del Cauca por la vulneración del artículo 416-A. del Código Sustantivo del Trabajo (derecho de permiso sindical).

la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (Número de radicado 11001-03-06-000-2007-00077-00(1852) ha manifestado que:

*En el caso concreto del pago de multas, sanciones e intereses de mora entre entes de carácter público, hay que determinar si ellos se produjeron por la conducta dolosa, ineficiente, ineficaz o inoportuna o por una omisión imputable a un gestor fiscal. Si así*

*se concluye, surge para el ente que hace la erogación, un gasto injustificado que se origina en un incumplimiento de las funciones del gestor fiscal. Es claro, entonces, que dicho gasto implica una disminución o merma de los recursos asignados a la entidad u organismo, por el cual debe responder el gestor fiscal.*

*\*Si requiere mayor espacio adjunte hoja (s) indicando el número de identificación del hallazgo y la auditoría que corresponda*

#### 4.1 Cuantía del daño\*

En cifras: \$31.249.680	En letras: TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
Moneda: PESOS	Año (s) en que ocurre el daño: 2019
El valor se determinó por la cuantía efectivamente pagada por la Universidad como resultado de la imposición de la sanción.	

*\*Si requiere mayor espacio adjunte hoja (s) indicando el número de identificación del hallazgo y la auditoría que corresponda*

#### 5. NORMAS PRESUNTAMENTE VIOLADAS (FUENTE DE CRITERIO)\*

<p><i>Artículo 6o. Ley 610 de 2000. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías.</i></p> <p><i>Artículo 8o. Ley 42 de 1993. La vigilancia de la gestión fiscal del Estado se fundamenta en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los costos ambientales, de tal manera que permita determinar en la administración, en un período determinado, que la asignación de recursos sea la más conveniente para maximizar sus resultados; que en igualdad de condiciones de calidad los bienes y servicios se obtengan al menor costo; que sus resultados se logren de manera oportuna y guarden relación con sus objetivos y metas. Así mismo, que permita identificar los receptores de la acción económica y analizar la distribución de costos y beneficios entre sectores económicos y sociales y entre entidades territoriales y cuantificar el impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y evaluar la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los mismos.</i></p> <p><i>Artículo 34 Ley 734 de 200 Son deberes de todo servidor público:</i></p>
---

*Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.*

*\*Enuncie en forma completa con número y fecha las leyes, decretos y resoluciones, entre otros, vigentes al momento de los hechos.*

#### 6. RESPUESTA DE LA ENTIDAD\*

##### **Respuesta de la entidad a la observación formulada por el equipo auditor.**

En consideración al oficio No. 2020EE0042276 del 25-04-2020, relacionado con la respuesta a la observación No. 22 realizada por la Contraloría General de la República en el marco de Auditoría Financiera Vigencia 2019, me permito dar respuesta de fondo a la misma, de la siguiente manera:

En primera instancia es preciso señalar, que previamente a la sanción impuesta a la Universidad del Cauca mediante resolución No. 118 del 26 de abril de 2018 confirmada por la Resolución No. 087 del 28 de febrero de 2019 del Ministerio del Trabajo, se procuró asegurar la defensa efectiva de la Institución y se interpusieron los recursos de ley. Una vez en firme la decisión sancionatoria por parte del Ministerio del Trabajo, se adelantó el trámite administrativo pertinente para proceder con el pago de la multa por valor de TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$31.249.680).

Así mismo se aclara que en la observación del Ente de Control se hace referencia a la resolución No. 118 del 26 de abril de 2018 como aquella que impuso la sanción administrativa laboral a la Universidad, sin embargo esta fue objeto de impugnación que fue resuelta por la Resolución No. 087 del 28 de febrero de 2019, la cual una vez quedó en firme hizo exigible la obligación en beneficio del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, y se pagó en su totalidad el 9 de abril de ese mismo año.

Como consecuencia de lo anterior, la Administración Universitaria a través de la Oficina Asesora Jurídica inició el análisis del proceso administrativo laboral con el objeto de identificar las condiciones de hecho y de derechos que dieron lugar al mismo y la forma en que se desarrolló, teniendo en cuenta que el 90% del proceso así como los hechos que le dieron lugar se desarrollaron en la administración anterior; todo ese proceso de estudio y análisis jurídico tomó tiempo dadas las contingencias a partir de las jornadas de movilización que generaron anormalidad administrativa y académica durante el año 2019.

En consideración a lo expuesto en el numeral precedente, la Oficina Asesora Jurídica emitió concepto jurídico No. 2.5-24.1/108 el día 31 de enero de 2020, en el cual expuso el análisis del caso en mención donde se acreditaron los elementos para iniciar una acción de repetición en contra del funcionario que presuntamente dio lugar a la imposición de la sanción pecuniaria contra la Universidad, sin embargo este concepto per sé no permite que se adopten las medidas judiciales y disciplinarias a que haya lugar, pues por su naturaleza no genera efectos vinculantes.

Bajo esos presupuestos, es claro para la Administración Universitaria que de configurarse los elementos de la acción de repetición existe la obligatoriedad de iniciar el proceso judicial, pero también que dicha actuación impone el deber al comité de conciliación de adoptar una decisión motivada y expresa respecto de la misma, es decir que no estamos ante una decisión unilateral por parte del representante legal y Rector de Institución, sino ante un requisito que somete la decisión a la estructura colegiada de quienes integran el Comité de Conciliación, conforme así lo prevé la el artículo 4 de la Ley 678 de 2001:

*ARTÍCULO 4o. OBLIGATORIEDAD. Es deber de las entidades públicas ejercitar la acción de repetición o el llamamiento en garantía, cuando el daño causado por el Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes. El incumplimiento de este deber constituye falta disciplinaria.*

*El comité de conciliación de las entidades públicas que tienen el deber de conformarlo o el representante legal en aquellas que no lo tengan constituido, deberá adoptar la decisión respecto de la acción de repetición y dejar constancia expresa y justificada de las razones en que se fundamenta. (Subrayado fuera del texto original)*

En cumplimiento de la orden normativa, no basta con el concepto jurídico que se haya emitido al respecto, sino que se requiere que el mismo sea analizado y debatido al interior del Comité de Conciliación a fin de que sus integrantes puedan manifestar una decisión expresa y justificada como exige la norma, a partir de la cual se pueda iniciar o no el proceso judicial.

Por lo anterior, dada la coyuntura que ha venido atravesando la Universidad del Cauca y máxime con las restricciones que se han venido aplicando con ocasión de las medidas de contención del COVID 19, no ha sido posible que el comité de conciliación se reúna para tomar una determinación en los términos que ordena la Ley antes mencionada, a lo que se suma el hecho de que de conformidad con los acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-



11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529 y PCSJA20-11532, No. PCSJA20-11546 DE 2020 se encuentran suspendidos los términos judiciales entre el 16 de marzo de 2020 y el 10 de mayo de 2020, por lo que la capacidad de acción en estos momentos es limitada.

Como consecuencia de lo anterior, de manera respetuosa se solicita al Ente de Control, desestimar la connotación disciplinaria y fiscal de la observación, y en particular por lo siguiente:

- Los funcionarios que ha intervenido en el cumplimiento de la sanción administrativa laboral han obrado en estricto cumplimiento de un deber legal, tal es el cumplimiento de la orden/ obligación contenida en los actos administrativos emanados del Ministerio del Trabajo.
- La Universidad del Cauca se encuentra en término para adelantar las acciones judiciales y disciplinarias pertinentes con las que pueda atribuir las responsabilidades y resarcir el daño patrimonial que se le pueda haber causado en tanto que:

La acción de repetición tiene una caducidad de dos (2) años contados a partir del día siguiente en que la entidad realizó el pago total de la obligación (multa impuesta por el ministerio del trabajo), es decir a partir de 10 de abril de 2019, fecha que claramente nos permite evidenciar que conforme al artículo 11 Ley 678 de 2001 en concordancia con el artículo 164 numeral 2 literal ( I ) de la Ley 1434 de 2011, no ha operado la caducidad, situación que aunada a la suspensión de términos judiciales, permiten asegurar que el derecho de acción de la entidad se encuentra incólume.

De conformidad con el Acuerdo 069 de 2002 que adopta todas las disposiciones que en materia disciplinaria establece la Ley 734 de 2002, la Universidad cuenta con cinco (5) años para iniciar el proceso disciplinario contra los funcionarios que hayan dado lugar a la imposición de la sin embargo, en virtud de las sanción Resoluciones 247 de 6 de abril de 2020 y R - 256 del 13 de abril de 2020 en concordancia con el artículo 6 del Decreto 491 de 2020, suspendió todas las actuaciones administrativas donde se enmarcan los procesos disciplinarios.

Bajo estos presupuestos, si bien es cierto ya se generó la erogación de dinero como consecuencia del pago de la sanción impuesta a la Universidad, aun se cuentan con herramientas jurídicas que permitan el resarcimiento de la afectación patrimonial acaecida a la Entidad, en el marco de los cuales se dispondrá de la debida diligencia pero también de la garantía efectiva de los principios de legalidad y debido proceso en cada etapa que deba surtir.



De esta manera, lo que se quiere aclarar al ente de control es que el cumplimiento de la sanción administrativa laboral también hace parte de la gestión fiscal de la entidad, pues de no haberlo hecho la afectación pudo haber sido mucho mayor, a lo que se suma el hecho de que la entidad está desplegando toda la gestión jurídica dentro de los términos pertinentes, para determinar las herramientas a través de las cuales se pueda resarcir el interés patrimonial afectado, y así lo continuará haciendo tan pronto finalice la suspensión de términos judiciales y administrativos .

*\*Realice un resumen de la respuesta de la entidad.*

## 7. ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE LA ENTIDAD

### Análisis de la respuesta de la entidad a la observación formulada por el equipo auditor.

La Entidad afirma en su respuesta que *“si bien es cierto ya se generó la erogación de dinero como consecuencia del pago de la sanción impuesta a la Universidad, aun se cuentan con herramientas jurídicas que permitan el resarcimiento de la afectación patrimonial acaecida a la Entidad...”* aduciendo que según el análisis realizado por la Universidad en el presente caso aplica la Ley 678 de 2001, es decir la acción de repetición, la cual no ha caducado toda vez que el pago total de la sanción se llevó a cabo una vez quedó en firme la Resolución No. 087 del 28 de febrero de 2019 del Ministerio de Trabajo, haciéndose efectivo el día 9 de abril de 2019.

Teniendo en cuenta lo anterior es necesario sacar a colación lo ya indicado por el Consejo de Estado en Concepto con Número de radicado 1716 de 2006 - Sala de Consulta y Servicio Civil, en cuya primera consideración el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo afirma que:

*La acción de repetición es la acción natural para obtener el resarcimiento del detrimento patrimonial del Estado como consecuencia del reconocimiento indemnizatorio efectuado por éste, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, por el daño antijurídico inflingido a un tercero, causado por una conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público o de un tercero en desarrollo de funciones públicas.”*

*En efecto, el artículo 90 de la Carta dispone:*

*"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.*

*En el evento de ser condenados el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste". (Destaca la Sala)*

*(...)*

*Como se advierte, el artículo 90 de la Constitución Política, dirigido a darle rango constitucional al tema de la responsabilidad patrimonial del Estado y de los servidores públicos, contiene un mandato imperativo, coercitivo, de carácter expícito e indefectible, al ordenar el inicio de la acción de repetición, siempre que una entidad pública haya efectuado un reconocimiento indemnizatorio, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, como consecuencia de los daños antijurídicos causados a un tercero por la condena dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público o de un particular que desempeñe funciones públicas. Así, de suceder el hecho descrito, debe darse la consecuencia allí prevista.*

*De suerte, pues, cada vez que el Estado haga un reconocimiento indemnizatorio para reparar patrimonialmente a un tercero, por el daño antijurídico a él inflingido, como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público o de un particular en ejercicio de funciones públicas, el mecanismo ideado por el constituyente y desarrollado por el legislador para regular la responsabilidad patrimonial de éstos proteger el patrimonio público y evitar el detrimento económico de las entidades públicas mediante el reembolso o el reintegro del monto pagado por la administración, es la acción de repetición, cuya naturaleza es jurisdiccional.*

*El fundamento de procedibilidad de la acción de repetición lo constituyen entonces dos elementos, la lesión al patrimonio de un tercero y la consecuente obligación de indemnizarlo por razón de una condena o de un arreglo conciliatorio, por la acción dolosa o gravemente culposa del agente del Estado.*

Los supuestos de procedibilidad de la acción de repetición esto es “*la lesión al patrimonio de un tercero y la consecuente obligación de indemnizarlo por razón de una condena o de un arreglo conciliatorio, por la acción dolosa o gravemente culposa del agente del Estado*”, implica en esencia la existencia de un daño antijurídico a un tercero y por tanto la responsabilidad patrimonial del Estado, como lo indica la Sala de Consulta y Servicio Civil; es así como en Sentencia C-957 de 2014 la Corte Constitucional, explica que “*el daño antijurídico, bajo los supuestos discutidos hasta el momento, debe recaer en principio, sobre un sujeto pasivo que en general, es una persona natural o jurídica, descrita por la jurisprudencia y la doctrina constitucional, como un particular, un asociado, un ciudadano, un administrado o una víctima del Estado.*”

Sin embargo en el presente caso, no nos encontramos en los supuestos a los que hace alusión el artículo 2 de la Ley 678 de 2001 esto es ante un “*reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto*” originado por un daño antijurídico que termine generando la responsabilidad patrimonial del Estado, sino, ante la imposición de una multa por parte del Ministerio del Trabajo contra

la Universidad del Cauca por la vulneración del artículo 416-A. del Código Sustantivo del Trabajo (derecho de permiso sindical).

En la misma sentencia la Corte manifiesta que si bien el pago de una multa por parte de una entidad genera un menoscabo económico "*claramente ello no genera un daño antijurídico en el sentido en que el concepto ha sido definido por la doctrina y la jurisprudencia relativa a la responsabilidad patrimonial del estado*" de igual forma en la sentencia ídem el máximo tribunal Constitucional menciona que en tratándose de una multa impuesta por el Estado lo que se busca es:

*asegurar que se respete el ordenamiento jurídico, siendo éste un mandato incumplido por la misma empresa sancionada, difícilmente puede ser considerado como la expresión de un daño "antijurídico" que de origen a responsabilidad patrimonial del Estado. El daño antijurídico es aquel que, quien lo sufre, no está obligado jurídicamente a soportarlo, es decir que carece de un título jurídico válido que lo soporte. Ello no ocurre cuando, en gracia de discusión, se le impone a una entidad de este tipo una multa, por el incumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales, que claramente son de su competencia.*

*De este modo, no puede ser la misma multa percibida como un "daño antijurídico" en sí mismo considerado, que signifique responsabilidad patrimonial del Estado, porque: (a) no existe un daño a un asociado en términos reales, sino un debate entre dos empresas con posición de autoridad, por el cumplimiento o incumplimiento de la ley; (...) (b) el daño no es antijurídico, porque la multa fue impuesta en cumplimiento de un deber legal que le daba justificación material al Estado para imponer la multa, por lo que en cualquier caso el afectado..."estaba llamada a soportarlo" ....*

*(...)*  
*En ese orden de ideas, si la multa no es una expresión de un daño antijurídico en los términos descritos, y la repetición que autoriza el Legislador, sobre la base de haber realizado un pago aparentemente indemnizatorio, nunca se dio, la repetición a la que se alude en este caso concreto carece del fundamento constitucional requerido en los términos del artículo 90 superior.*

Finalmente, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado (Número de radicado 11001-03-06-000-2007-00077-00(1852) ha manifestado que:

*En el caso concreto del pago de multas, sanciones e intereses de mora entre entes de carácter público, hay que determinar si ellos se produjeron por la conducta dolosa, ineficiente, ineficaz o inoportuna o por una omisión imputable a un gestor fiscal. Si así se concluye, surge para el ente que hace la erogación, un gasto injustificado que se origina en un incumplimiento de las funciones del gestor fiscal. Es claro, entonces, que dicho gasto implica una disminución o merma de los recursos asignados a la entidad u organismo, por el cual debe responder el gestor fiscal.*

**8. DETERMINACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS O PARTICULARES QUE PARTICIPARON EN LOS HECHOS Y QUE SERÁN VINCULADOS AL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL \***

<b>FUNCIONARIOS O PARTICULARES:</b>			
<b>SI ES PERSONA JURÍDICA INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:</b>			
Nombre de la persona Jurídica			
NIT de la persona Jurídica		DV del NIT	
Dirección:			
<b>SI ES PERSONA NATURAL INDIQUE LOS SIGUIENTES DATOS:</b>			
Nombres y apellidos	JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO		
Identificación	6.893.441		
Cargo en la Entidad	RECTOR PERIODO		
Dirección	Calle 4 No- 13-49		
Forma de Vinculación	Nombramiento		
Período en el Cargo: Desde	Rector de Universidad 004520 de la Universidad del Cauca, para un periodo estatutario de tres (3) años, a partir del 22 de abril de 2012 y hasta el 21 de Abril de 2015, periodo modificado a cinco (5) años mediante resolución 041 del 12 agosto de 2013, determinando un periodo entre el 22 de abril de 2012 y el 21 de abril de 2017.	Hasta	
Explique las razones por la cuales considera que esta persona ha participado en los hechos:			
El señor JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO se desempeñó como rector, representante legal y ordenador del gasto en el periodo en el que se originó el daño patrimonial, a través de la suspensión del permiso sindical (Resolución rectoral 951 de 2014 de la Universidad del Cauca), el cual generó la imposición de la sanción referida en el hallazgo.			
<p><i>*Nota 1. En este capítulo se explica la actuación del funcionario o particular que participó en los hechos, por tener poder de decisión o sin tenerla, haber determinado el daño (por ocasión o por contribución) quien participó en los hechos y que será vinculado al proceso de responsabilidad fiscal, haciendo énfasis en que su conducta se realizó en cumplimiento de una función establecida en la Ley, reglamento, manual de funciones, instrucción escrita de un superior jerárquico o cualquier otro acto administrativo. En tratándose de particulares, se indicará la norma legal o el contrato que lo habilita para actuar como gestor fiscal.</i></p>			

*Si se trata de uno o varios servidores públicos, indique el (los) acto (s) administrativo (s) mediante el cual se le vinculó como tal y transcriba la parte pertinente de la norma legal o reglamentaria, del Manual de Funciones, de la Instrucción o del Memorando, etc, mediante la cual se le asignó a ese servidor la función que ha originado el daño al patrimonio público.*

**Nota 2.** Si se trata de un particular que administra recursos públicos, señale la norma legal o el contrato que lo habilita para realizar actividades a nombre del Estado y transcriba la parte pertinente mediante la cual se le otorgó a ese particular la facultad de administrar recursos públicos, que han originado el daño al patrimonio público

**Nota 3.** En algunos casos se deberá indicar tanto el nombre de la persona jurídica como de las personas naturales que han participado en los hechos.

**Nota 4.** El (los) cuadro (s) anterior (es) debe (n) repetirse de acuerdo con el número de personas que han participado en los hechos.

## 9. GARANTE.

DATOS BÁSICOS DEL TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE	
Nombre Compañía Aseguradora	LA PREVISORA
NIT de la Compañía Aseguradora	860.002.400-2
Dígito de Verificación	2
Número de Póliza(s)	POLIZA No. 1003991
Vigencia de la Póliza.	DEL 31/05/2018 AL 31/05/2019
Riesgos amparados	ACTOS INCORRECTOS, ACTOS QUE GENERAL JUICIOS DE RESPONSABILIDAD, COBERTURA RESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES PUBLICOS, GASTOS JUDICIALES
Valor Asegurado	\$500.000.000
Fecha de Expedición de póliza	15/06/2018
Cuantía del deducible	No aplican deducibles.

*\*Nota: Los cuadros anteriores deben repetirse de acuerdo al número de pólizas que se requiera registrar.*

## 10. MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL HALLAZGO

MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL HALLAZGO
Resolución 118 del 26/04 de 2018, del Ministerio de Trabajo, por medio de la cual se decide un procedimiento administrativo de carácter sancionatorio en contra de la Universidad del Cauca.
Resolución 087 del 28 de febrero de 2019, del Ministerio de Trabajo, por medio de la cual se decide un recurso de apelación.
Resolución 267 del 8 de abril de 2019 por medio de la cual la División Financiera de la Universidad del Cauca ordena el pago de una sanción administrativa.
Resolución Rectoral Unicauca No. 951 de 2014
Resolución 283 del 13 de abril de 2015
Resolución 024 de 2015
Sentencia 170 del 12/08/2015 del Tribunal Administrativo del Cauca
Resolución 264 del 2012. Negociación Colectiva
Resolución DRH-435 de 2003
Comprobante de pago No. 201900016 del 9 de abril de 2019 por \$ 31.249.680
Certificación de permanencia JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO.
Acta No. 14 del 20 de mayo de 2015. Consejo Superior de la Universidad del Cauca
Hoja de vida y declaración de bienes y rentas de JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO
Resolución 017 de abril de 2012.
Resolución 041 del 12 de agosto de 2013.
Certificación de funciones rector de la Universidad del Cauca.

### 10.1. Pruebas mínimas:

*Fotocopias de Hoja de vida del Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP), Cedula, Formato de bienes y rentas, actas de posesión; certificaciones de cargos, salarios, fechas de ingreso y retiro, copias y/o certificaciones de los actos de nombramiento y actas de posesión de personas y Manuales de funciones de las personas que han participado en los hechos, certificación de la menor cuantía de la Entidad afectada, al momento en el que ocurrieron los hechos, pólizas en forma completa con carátula y sus anexos.*

### 10.2. Otras pruebas según la naturaleza de los hechos:

*Informes técnicos, actas de visitas técnicas; partes pertinentes de los papeles de trabajo en lo relacionado con el hallazgo; Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal; Cuentas, facturas, cheques, otros títulos valores, actas de recibo de bienes e inventarios,*

*Copias de contratos y sus actas precontractuales, contractuales y postcontractuales, documentos e información sobre obras adicionales, actas de iniciación, terminación y recibo de obra o liquidación de contratos y pólizas.*

*Cotizaciones o avalúo de bienes y servicios para la fecha de las diversas etapas contractuales a fin de determinar posibles sobrecostos, aclarando que aquellos que se recauden por funcionarios de la CGR deben ir dirigidas a nuestra organización, teniendo en cuenta que éstas deben referirse a las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar.*

*Actas o documentos de juntas directivas o de socios, o del órgano rector de la entidad, aprobación de compras, evaluación de contratos, de entrega y recibo de inventarios.*

*Tarjetas de kárdex, comprobantes de egreso e ingreso de bienes.*

*Comprobantes de pago, recibos de caja, que permitirán demostrar el daño.*

*Documentos de registro mercantil, de la Superintendencia de Sociedades y otros organismos de vigilancia y control. Estos conllevan a demostrar la gestión de la entidad, así como la existencia y representación legal, lo que servirá para vincular a la respectiva Compañía.*

*Conceptos jurídicos y técnicos sobre aprobación de contratos, de prestación de servicio o de obra.*

*Conceptos jurídicos y técnicos sobre estudio y aprobación o idoneidad de garantías para otorgamiento de créditos.*

*Actas de aprobación de créditos. Soportes técnicos y/o contables y financieros sobre el patrimonio vigente para la época de la aprobación del crédito y fecha de desembolso.*

*Reestructuraciones efectuadas al crédito, indicando montos, fecha y el órgano que lo aprueba.*

*Estado actual de la operación crediticia, indicando fecha de vencimiento de las cuotas y vencimiento final, si existe recomposición de cartera, ofertas, etc.*

*Copias de los Estados contables y de las partes pertinentes de los libros de contabilidad y balances.*

*Actas de visitas especiales de la Procuraduría o visitas del órgano de control fiscal o informe de auditorías anteriores.*

*Informes sobre pérdida de bienes, siempre que exista gestión fiscal. Copias de actuaciones disciplinarias o administrativas de control interno de la entidad, por pérdida o daño de bienes o fondos de la nación.*

*Información y documentos de acciones penales iniciadas por delitos contra las administraciones públicas o conexas.*

*Copia de estatutos, resoluciones, directivas, circulares y otros documentos o actos administrativos que haya proferido el auditado, que regulen su funcionamiento interno y que tengan relación con el hecho auditado a investigar.*





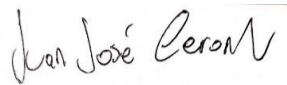
*Fotografías, cintas magnetofónicas o de vídeo, medios electrónicos, cuadros, pinturas, y otros documentos relacionados con el hecho sometido a vigilancia fiscal.*

*Archivos magnéticos y los registros en los sistemas de información que soportan los hallazgos detectados por los auditores o los especialistas de TI. En este caso debe identificarse plenamente el o los archivos que los contienen y señalar el procedimiento utilizado por el auditor para llegar a las conclusiones emitidas.*

***Recuerde que la anterior relación no es taxativa, corresponde al auditor determinar y recaudar el material probatorio a que haya lugar, de conformidad con el hecho irregular.***



# 11. NOMBRE Y FIRMA

Nombre del funcionario	Rol en la actuación de vigilancia y control fiscal*	Firma
Yulder Palechor Ramírez	Ejecutivo de auditoría	
Gerardo Díaz Martínez	Supervisor encargado	
Jackeline Muñoz López	Responsable o líder de auditoría	
Jackeline Muñoz López	Auditor que detectó el hallazgo	
Juan José Cerón Vásquez		

**\*Conforme a lo que establece el documento “PRINCIPIOS, FUNDAMENTOS Y ASPECTOS GENERALES PARA LAS AUDITORÍAS EN LA CGR”, sobre los roles en la administración de estos procesos.**

Preparó: Oficina de Planeación y Contraloría Auxiliar 1 del SGR  
 Revisó: Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva  
 Adaptado : Guía de Auditoría de la CGR